

EN GUATEMALA

Carlos E. López García*

Al tercer mes de su gestión en Guatemala, encabezando un gobierno civil, Vinicio Cerezo comienza a ser objeto de análisis políticos en tal calidad, como presidente. Diversas y muy encontradas son las opiniones que su gestión despierta. En esta nota trataré de resumir las más relevantes.

1. *El equipo gobernante no tiene la capacidad suficiente ni la cohesión necesaria para desarrollar un verdadero proyecto alternativo al que hasta ahora se ha manejado.* Esto parece ser cierto, sobre todo, en el campo de la economía y de la organización social. En menor medida en el terreno de la política, donde su compromiso de abrir los espacios de la democracia están siendo puntualmente cumplidos.

Si nos situamos en los años que van de 1982 a 1984, veremos que las demandas de la sociedad civil eran abrumadoras en ese sentido y se concretaban en los deseos manifiestos de vivir en paz y sin temores, así como en ejercer libremente sus derechos políticos. A estas demandas, y como prueba de que sí han sido en buena medida satisfechas, se han sumado las que se escuchan en el ámbito latinoamericano como producto de una crisis que le azota de manera global y en la cual los factores externos son im-

pactantes: inflación, recesión, desempleo y el incremento de los delitos del orden común. Estos últimos, independientemente de razones de fondo social, encuentran su explicación casuística en las órdenes expresas dictadas a la policía de no hacer uso de sus armas de fuego y en consignar inmediatamente a los delincuentes, mismos que aprovechan la situación para actuar con márgenes de impunidad.

Confundir los delitos del orden común, equivocada o deliberadamente, con acciones de tipo político, puede llevar inicialmente a un descrédito internacional del régimen de Vinicio Cerezo pero, a la larga, en un descrédito mucho mayor de quienes usufructen tal confusión, debido a su normal rechazo por parte de los ciudadanos.

2. *Segunda crítica: persisten las violaciones a los derechos humanos.* Debo confesar que es sumamente difícil para quien avale o refute esta afirmación, comprobarla plenamente. Sin embargo, podemos adelantar algunos hechos válidos: no hay ninguna razón política de peso para que el régimen de Vinicio Cerezo escoja esta vía como medio de suprimir la oposición a su gobierno. Tanto la ultraderecha como la izquierda en armas han perdido sustancialmente su caudal político y no aparecen en esos términos como capaces de interrumpir la gestión gubernativa de la Democracia Cristiana (DC). De otra parte, la oposición de la llamada derecha moderna o derecha democrática se desarrolla en los marcos de la más estricta legalidad y tiene como objetivo ocupar la silla presidencial en el siguiente periodo. Aquí se ubican de manera fundamental la Unión de Centro Nacional (UCN) (Carpio Nicolle) y el Partido de Cooperación Nacional (PCN) (Serrano Elías).

La izquierda que rechaza la

violencia como vía de acceso al poder, realiza su trabajo político en consonancia y se apegá al orden legal vigente. Debido a su ya conocida atomización, sólo aparece representada de momento por el Partido Socialista Democrático (PSD) cuya figura principal la constituye Mario Solórzano Martínez. Es pues innecesario, para Vinicio Cerezo, el ejercicio de la represión como fórmula para la conservación de un poder que no aparece seriamente amenazado.

Fuera del esquema partidario, otras fuerzas como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Mercantiles y Financieras (CACIF), las organizaciones sindicales o el propio ejército, tampoco obtendrían dividendos de una interrupción del régimen democristiano; todo lo contrario, a los tres sectores, profundamente distanciados entre sí, conviene más su persistencia. Al primero, para enderezar sus agotadas finanzas que se han visto privadas del auxilio internacional; al segundo, para organizarse plenamente y al tercero, para detener el acelerado desgaste que tuvo, sobre todo, de 1979 a 1981.

Como dije, es difícil comprobar violaciones a los derechos humanos en el nuevo régimen, pero no existe credibilidad absoluta en su no violación. Habría que esperar un tiempo prudencial.

3. *El proyecto democristiano es abstracto, por lo tanto, impreciso.* Comparto en buena medida esta apreciación, pero no del todo puesto que esta misma situación, percibida en el *Plan de Reordenamiento Económico y Social*, deja abiertas las puertas a las iniciativas de la sociedad civil para organizar su forma de vida, fundamentalmente en el terreno del cooperativismo, tanto en el ámbito de la producción como del consumo. En dicho

* Profesor en la UNAM Exprofesor en el ITESO.

La falta de consecuencia política de este militar con los propósitos de la oficialidad joven, cansada de una absurda guerra interna y de la corrupción, le llevan a Ríos Montt a ser a su vez objeto de otro golpe que instala a Humberto Mejía Víctores en la Jefatura de Estado en 1983. Dos años después, éste cumple su palabra y devuelve el poder a los civiles, libremente elegidos por el pueblo.

Vinicio Cerezo no inaugura la política internacional de Guatemala, pero la legitima plenamente debido a que emana de la voluntad soberana del pueblo. Visto así, dicha política se corresponde completamente con los deseos nacionales y con su historia, con su acendrado centroamericanismo y con su anhelo de unificación del área y de no intromisión de manos extrañas.

5. *La democracia.* En voz de los dirigentes y actores más connotados del proceso de democratización de Guatemala, entre quienes se encuentra Mario Solórzano, los problemas políticos más sobresalientes para el retorno de la democracia son, del lado de la *clase política*, dejar de ver los problemas *en blanco y negro* y ampliar sus propias imágenes en el gran espectro que hoy constituye la sociedad guatemalteca. Entender el enorme cansancio, desilusión y dolor que han dejado los hechos de violencia política, misma que, en las particulares condiciones de Guatemala, no constituye una alterantiva real de poder o de organización social. Dar paso a la tolerancia política donde el derecho a la disensión no lo es sólo respecto del Estado sino incluso dentro de las propias organizaciones de la izquierda (la intolerancia lleva a que, v.gr., se haga fraude desde la izquierda a la elección de dirigentes estudiantiles).

Desde la sociedad civil, el mayor obstáculo lo constituye el te-



rror, minuciosamente cultivado por el proyecto represivo de 1979-1981. El pueblo ha comenzado a perder el miedo, pero aún guarda bastante recelo y desconfianza. Como dato significativo vale la pena mencionar que la DC obtuvo más votos que sus contrincantes en Zacapa (36%), mismo lugar en donde el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) (quien había dicho que esa era la cuna del anticomunismo) sólo obtuvo 22%.

Sumados los votos de la ultraderecha, alcanzan 28%, el centro derecha 12% y los de centro izquierda el 60% restante. Aun si sumáramos a los dos primeros (Sandoval Alarcón y Serrano Elías), quedarían muy abajo de la mitad de los votos emitidos.

Únicamente en los departamentos de Chiquimula y Jalapa estuvo el MLN arriba de la DC. Sin embargo, en ninguno de los dos la coalición de la extrema derecha (43 y 36% respectivamente), pudo superar los votos de la DC, la UCN y el PSD sumados (46 y 57%). Las diferencias corresponden al Partido Revolucionario (PR)-PCN, ubicados en el centro-derecha.

Más interesantes aún resultan las versiones de los zacapanecos. Un antiguo militante del PR (aclaración suya: “Nada tengo que ver con la dirección corrupta del PR”)

manifiesta que se sumó entusiastamente a la campaña de la DC para "no morirme sin ver que el anticomunismo era vencido en Zacapa". Otros activistas zacapanecos sostienen que su apoyo a la DC se dio por dos motivos: constituye el primer paso para el retorno a la democracia y veían difícil que una alterantiva como el PSD pudiera obtener el triunfo en esta ocasión.

La segunda razón, según ellos, se debe a que la población no pierde todavía el miedo a la represión ocurrida en esa zona a mediados de los años sesenta, por el apoyo brindado al movimiento armado. Ellos creen que la gente votaría gustosa por el PSD, para avanzar más en la democracia y la justicia social, si este logra garantizar su desvinculación con la violencia política.

La democracia es, así, no el deseo dictado por iluminados políticos, sino la demanda real de la población. Su lucha por conquistarla no cesará, independientemente de que el Estado abra los canales o intente cerrarlos. Hoy, lo más revolucionario del proyecto social guatemalteco es la lucha por la consolidación de la democracia y la paz sociales. La lucha por la unificación de América Latina y particularmente, del istmo centroamericano.